

de diligencias, devengarán iguales derechos que los que correspondieran á aquél.

Art. 136. Lo mismo los hombres buenos que los testigos de asistencia, cuando fueren dos, partarán por mitad el importe de los derechos que en su caso cobraría el Escribano de actuaciones ó el Secretario á quienes sustituyan.

Art. 137. El Fiscal que interviniere en segunda instancia en los juicios de faltas percibirá iguales derechos que los señalados á los Escribanos de actuaciones por las diligencias para la sustanciación de las apelaciones de dichos juicios.

Art. 138. Lo dispuesto en estos Aranceles se entenderá siempre sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la ley provisional para la aplicación del Código penal vigente en Filipinas, y de lo que en cada caso resuelva el Juzgado ó Tribunal aprobando ó reformando la tasación y regulación de las costas, cuando les pareciere excesiva ó ilegítima alguna partida de honorarios, derechos, emolumentos, etc., por virtud de las facultades que les corresponden por el artículo 85 de la citada ley provisional y por el 244 del Real decreto de 19 de Octubre de 1888, que aprobó para las Antillas la ley de Enjuiciamiento criminal de la Península.

Art. 139. Se hace extensivo á este Arancel, en todo aquello que no pugne con lo en él establecido, cuanto disponen los artículos 346 al 359 del aprobado por el Real decreto de 18 de Julio de 1893.

Art. 140. Los derechos consignados á los Secretarios de gobierno, Secretarios y Oficiales de Sala, Canciller y Archivero, y la mitad de los que corresponden á los Intérpretes que tengan dotación fija en los presupuestos de gastos ingresarán en el Tesoro público en papel de Pagos al Estado.

Art. 141. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los derechos y dietas por las diligencias que tengan lugar fuera del término municipal de la residencia del funcionario que las practique.

Art. 142. Las indemnizaciones á los testigos que comparezcan á declarar en los juicios orales y públicos se fijarán por el Tribunal y se satisfarán en la forma prescrita por el artículo 722 de la ley de Enjuiciamiento criminal vigente en las Antillas.

Art. 143. Mientras otra cosa no se disponga, las cuentas trimestrales de las indemnizaciones á que se refiere el artículo precedente, se examinarán y aprobarán por las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales dentro del mes siguiente al trimestre á que correspondan.

Para ello, los Presidentes de las Audiencias de lo criminal cuidarán de remitir dichas cuentas á los de las territoriales respectivas en los primeros quince días inmediatos al trimestre vencido, y éstos las devolverán con la nota de aprobación y los reparos y observaciones que correspondan en su caso.

Art. 144. Mientras subsista en Filipinas la actual legislación procesal, cobrarán los Secretarios de Sala de las Audiencias por formar los apuntamientos los derechos señalados por el mismo servicio en los pleitos en los Aranceles aprobados por el Real decreto de 18 de Julio de 1893, y los ingresará en el Tesoro en papel de pagos al Estado, conforme á lo prevenido en el artículo 140.

Art. 145. En adelante sólo podrán conferirse las comisiones extraordinarias del servicio á que se refiere el artículo 513 del Real decreto de 5 de Enero de 1891 en casos muy especiales no previstos en estos Aranceles Madrid, Mayo 18 de 1894.—Aprobado por S. M.—M. BECERRA.

Real orden que se cita en el artículo 123 de los Aranceles para lo criminal en Ultramar.

Excmo. Sr. — Vista la carta oficial número 306 del Presidente de la Audiencia de la Habana, cuando cuenta del acuerdo de su Sala de gobierno de 27 de Septiembre último, dictado en el expediente que se instruyó con motivo de haberse las oficinas de Hacienda de esa Isla negado á satisfacer los haberes que han venido percibiendo siempre los Magistrados suplentes y Abogados fiscales sustitutos, por entender dichas oficinas que están suficientemente retribuidos con los beneficios que les atribuye el artículo 41 del Real decreto de 5 de Enero de 1891;

Y resultando que la pretensión de la Sala de gobierno de la Audiencia mencionada está reducida á que se declare que los Magistrados suplentes y Abogados fiscales sustitutos tienen igual derecho á sueldo que el reconocido á los interinos por el artículo 143 del Real decreto citado, porque el corto personal de las Audiencias, y singularmente las de lo criminal, exige valerse con frecuencia de los Magistrados suplentes, como necesariamente ocurre en las últimas, siempre que se trata de causas en que hayan de figurar cinco Magistrados, so pena de que se originen grandes atrasos en la administración de justicia, y por el inconveniente que puede surgir si por falta de retribución no se encuentran Abogados que se presten á desempeñar dichos cargos;

Y resultando que el Presidente de la Audiencia haya el acuerdo aludido en diversas disposiciones leen el Real decreto de que se ha hecho mérito y largo período de licencia que corresponde disfrutárselos funcionarios Proprietarios, y consiguientemente basta los largos plazos en que son sustituidos por los públicos de Hacienda;

Considerando que es incontestable la conveniencia de una manera precisa el derecho que

en materia de haberes corresponde á los Magistrados suplentes de las Audiencias de Ultramar, que en cumplimiento del artículo 40 del Real decreto de 5 de Enero de 1891 son llamados á las Salas de justicia, cuando por circunstancias accidentales no bastan los propietarios:

Considerando que la existencia de los Magistrados aludidos está perfectamente determinada por el artículo 40 citado de la Compilación de 5 de Enero de 1891:

Considerando que sus artículos 40, 41, 144 y 303 y las Reales órdenes de 25 de Junio y 13 de Julio de 1891 y de 20 de Marzo de 1892, disponen que los Magistrados suplentes serán nombrados por el Gobernador General de la Isla, á propuesta de las respectivas Salas de gobierno, en quienes puede recaer el nombramiento que cuando esté incompleto el número de Magistrados de las Audiencias y no sea posible reemplazarlos por suplentes, deberán asistir por disposición ú orden de los Presidentes de las Audiencias territoriales, los de las otras Audiencias de lo criminal; y que cuando el cumplimiento de esto resulte difícil, se llame para constituir Tribunal á los Jueces de primera instancia y de instrucción, á los municipales y de paz y á los Abogados:

Considerando que la regla general en la materia es que, cuando un funcionario activo de la Administración con dotación fija en presupuesto sea nombrado Magistrado suplente ó para servir cualquier otro cargo, no tiene derecho á abono alguno extraordinario sobre el haber que le corresponde por su empleo en propiedad, en el caso de que para constituirse en Sala de justicia ó para los otros servicios que se le encomienden ó le correspondan por sustitución reglamentaria no tenga que abandonar el punto de su residencia:

Considerando que tampoco tiene derecho á abono alguno de haberes el Magistrado suplente que, sea ó no funcionario activo de la Administración, actúe en Sala de justicia sin vacante de Magistrado propietario por exigirle el número excesivo ó la calidad de los negocios ó por cualquier otra causa, correspondiéndole en tal caso, solamente los beneficios que les otorga el artículo 41 del Real decreto mencionado de 5 de Enero de 1891:

Considerando que los nombramientos de los Magistrados suplentes se hacen por años judiciales, con arreglo al artículo 40 de la Compilación mencionada; que de ello se dá cuenta á este Ministerio, con sujeción al artículo 144 de dicha Compilación; que sustituyen á los propietarios en los casos de vacante accidental ó definitiva, y que en estos casos no cabe desconocer su derecho al haber que para los interinos señala su artículo 143, porque lo contrario, tras de pagar con lo expuesto, sería hacerles de peor condición que á los demás funcionarios de la Administración civil interinos nombrados para cada caso en que ocurre la vacante:

Considerando que en cuanto á los Abogados fiscales sustitutos nombrados por los Fiscales de las Audiencias respectivas, con arreglo al artículo 454 de la referida Compilación, para que suplan á los propietarios en caso de vacante ó de cualquier impedimento, tienen derecho á los mismos beneficios declarados á favor de los Magistrados suplentes, según el artículo 455

S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que los Magistrados suplentes y los Abogados fiscales sustitutos, suplentes ó interinos, cuando actúen en vacante accidental ó definitiva, tienen derecho á los haberes que fija el párrafo tercero del artículo 143 del Real Decreto de 5 de Enero de 1891, estén confirmados ó no de Real orden sus nombramientos, por ser éstos, en primer término, de la competencia de los Gobernadores Generales y Fiscales de las Audiencias respectivas, con arreglo á los artículos 40 y 454, y que, para evitar nuevas dudas y vacilaciones en un particular tan relacionado con la buena administración de justicia, se recuerde á las oficinas de Hacienda de las provincias de Ultramar:

1º Que se entiende que la vacante es accidental, cuando el propietario de la plaza se halle con licencia en la Península ó extranjero, agregado á la Comisión de Códigos de las provincias de Ultramar, en comisión extraordinaria en la Península, encausado ó suspendido de sus funciones.

2º Que es definitiva cuando no haya funcionario nombrado para ella, ó habiéndole deje de percibir el haber para él consignado.

3º Que en los casos de vacante accidental á causa de hallarse el propietario en comisión del servicio para la Península por extraordinarias y urgentes necesidades del Estado, según los artículos 510 y 511 de la Compilación, los que ocupen la vacante producida por las resultas no podrán cobrar mayor cantidad de la que en concepto de sobresueldo deje de percibir el comisionado.

4º Que en los de vacante definitiva, en que el sustituto ó interino percibe el sueldo y sobresueldo, se le debe descontar del último pago que se le haga el importe del sueldo personal que se ha de reconocer y abonar al propietario por el tiempo de navegación y demás que transcurra hasta el acto posesorio.

5º Que si el sustituto ó interino gozase de haber pasivo, se le deducirá éste en caso de vacante definitiva, de todo el de la plaza activa que sirva, disfrutando tan sólo el sobresueldo de ella además de su haber pasivo, desde la fecha de embarque del propietario nombrado hasta la toma de posesión de éste.

Y 6º Que sin excusa ni pretexto alguno, á los funcionarios interinos mencionados se les abonen en lo sucesivo los haberes que legítimamente les corres-

pondan con la misma puntualidad que á los otros funcionarios de la Administración activa.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 27 de Noviembre de 1893.—MAYRA.—Sr. Gobernador General de la Isla de Cuba.

Es copia — El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha.

Negociado de Obras públicas

Fosfatos calizos. — Concesión de la mina "Bracero" en la jurisdicción de San Germán.

Examinado el expediente de concesión del registro minero de fosfato calizo denominado "Bracero", radicado en el barrio "Llanos Tuna" término municipal de San Germán, solicitado por Don Alfredo L. Collado y Jusino vecino de Mayagüez;

Resultando haberse seguido toda la tramitación que marca el Real Decreto de 15 de Enero de 1867 y el Reglamento para su ejecución;

Resultando que el día 16 de Marzo próximo pasado se verificó por el Sr. Ingeniero de Minas previa orden de este Gobierno General, la demarcación de dicha mina con todas las formalidades prevenidas y sin que resultase oposición de ninguna clase;

Considerando que ha sido entregado en la Secretaría de este Gobierno General el correspondiente papel de pagos al Estado y el necesario para la expedición del título con arreglo á lo prescrito en las disposiciones vigentes;

Oído el dictamen del Sr. Ingeniero del Ramo; el Excmo. Sr. Gobernador General ha tenido á bien conceder con fecha 28 del mes de Mayo último á Don Alfredo L. Collado y Jusino la propiedad de la citada mina "Bracero" y que se le expida el título de propiedad bajo las condiciones generales de minería.

Lo que de orden de S. E. se hace público por medio del PERIÓDICO OFICIAL para general conocimiento. Puerto-Rico, 16 de Junio de 1894.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha. (669)

NEGOCIADO 5º

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General, se ha señalado el día 7 de Julio próximo para la adjudicación en pública subasta y con arreglo al pliego de condiciones que á continuación se inserta, el servicio de conducción de la correspondencia postal entre Humacao y Guayama, cuyo acto se verificará á los nueve de la mañana del expresado día en la Secretaría de este Gobierno General y simultáneamente en las Administraciones de Comunicaciones de las citadas localidades.

Administrativas.

1ª En la ejecución por contrata de conducción de correspondencia entre la Administración de Comunicaciones de Humacao y la de Guayama, regirán además de lo que prescribe el Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, hecho extensivo á esta Isla el 29 de Setiembre de 1856 y de las facultativas que se expresan á continuación las prescripciones económicas siguientes.

2ª Las proposiciones de los que quieran tomar parte en la licitación, deberán presentarse en pliegos cerrados estando estos arreglados exactamente al modelo adjunto, firmado por los interesados, acompañando su cédula de vecindad, relación de los conductores y suplentes, con sus cédulas, así como la carta de pago que acredite haber consignado en la Tesorería Central de Hacienda ó Administraciones locales de Aduanas de Humacao ó Arroyo, el depósito provisional que previenen estas condiciones, con arreglo á la proposición, admitiéndose éstas solamente durante la primera media hora del acto.

3ª El tipo maximum del remate será de dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos moneda oficial anuales, abonándose mensualmente la dosava parte de dicha cantidad, siendo nula toda proposición que exceda de dicha suma.

La fianza provisional para tener derecho á la licitación, ascenderá al 5 por 100 de la totalidad, elevándose despues al 10 por 100 de aquella por la cual se haya adjudicado el servicio.

4ª La duración del contrato será de dos años que empezarán á contarse desde el día en que empiece el servicio, dando aviso el contratista á la Administración general con tres meses de anticipación al vencimiento para que se proceda á nueva licitación, y si sobreviniesen causas que impidan llevarlo á cabo, el Contratista queda obligado á continuar el servicio tres meses más del tiempo contratado bajo el mismo precio y condiciones estipuladas.

5ª El licitador á quien se hubiese adjudicado este servicio tendrá quince días de término contados desde aquel en que se le notifique la aprobación del remate para constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura de contrata ante Notario, cuyos gastos así como el de los dos testimonios que deberá presentar para unir á los expedientes del Gobierno General y Administración General y el reintegro del papel del sello 11º correspondiente al acto de subasta según dispone el reglamento para la aplicación de la Ley del timbre,